Considerando que tal doctrina es absolutamente aplicable a la traba hecha por la Delegación de Hacienda de Guipúzcoa sobre las certificaciones de referencia, puesto que si bien el artículo once de la Ley de Administración y Contabilidad del Estado concede a la Hacienda una prelación genérica para el cobro de sus créditos liquidados, salvo determinadas preferencias que no son de aplicación al presente caso, ello no obstante ha de entenderse que tal preferencia sólo puede ejercitarse sobre los bienes o caudales que no estén expresamente excluidos de toda clase de traba, como son precisamente los aludidos en el inciso final del artículo treinta y seis del Pliego de mil novecientos tres;

Considerando, por lo expuesto, que con independencia de la prelación que en su momento corresponda atribuir a cada uno de los embargos trabados sobre el importe de las referidas certificaciones, una vez que el mismo haya sido entregado a su titular, ambos han sido realizados con manifiesta incompetencia, tanto por parte de la Magistratura del Trabajo como por parte de la Administración, dado el tenor del artículo treinta y seis, sin este final, del Pliego de trece de marzo de mil novecientos tres.

De conformidad con el dictamen emitido por el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión de diecinueve de febrero de mil novecientos sesenta y cinco,

Vengo en declarar la incompetencia de la Magistratura del Trabajo y de la Delegación de Hacienda de Guipúzcoa en cuanto al embargo de las certificaciones a que se refiere la presente cuestión de competencia.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a once de marzo de mil novecientos sesenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 558/1965, de 11 de marzo, por el que se resuelve el conflicto negativo de atribuciones surgido entre los Ministerios de Marina y de Comercio con motivo de la reclamación presentada por «Agreda, Dutu y Cia.»

En el conflicto negativo de atribuciones suscitado entre el Ministerio de Marina y el de Comercio para conocer de la asignación de ciertas cantidades de algodón a precio bonificado, o subsidiariamente el pago de la indemnización adecuada, en virtud de los contratos existentes entre «Agreda, Dutu y Cia.» y el Departamento de Marina; y

Resultando que el General Jefe de los Servicios de Intendencia de Marina comunicó a «Agreda, Dutu y Cia.» su derecho a la reposición de mil cuatrocientos kilogramos de algodón a precio bonificado por haberse destinado a suministro de organismos oficiales, como lo es la Intendencia de Marina, pero que tales bonificaciones habían sido suprimidas por Orden de la Subsecretaría de Comercio de doce de diciembre de mil novecientos sesenta, lo cual vulneraba derechos adquiridos por los proveedores de la Marina que resultaron adjudicatarios de suministros para el año mil novecientos sesenta, como era el caso de «Agreda, Dutu y Cia.», por lo que se solicitó del Ministerio de Comercio una rápida y equitativa solución de la cuestión, sin que hasta aquel momento, doce de enero de mil novecientos sesenta y tres, se hubiera obtenido contestación sobre el particular;

Resultando que en escrito de dieciocho de octubre de mil novecientos sesenta y tres, don Francisco Martínez Arenas, en representación de «Agreda, Dutu y Cia.», solicitó del Ministerio de Marina la indemnización por daños y perjuicio de pesetas dieciséis mil novecientas dieciocho con sesenta y cinco céntimos, con base en el artículo cuarenta de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, resolviendo tal Departamento ministerial desestimar la petición formulada por entender cumplimentadas todas las obligaciones que le correspondían en los contratos relativos a los suministros de que se trata y por ser de la competencia del Ministerio de Comercio los preceptos que rigen las bonificaciones de algodón para suministros a Organismos oficiales; y habiéndose interpuesto recurso de reposición contra la anterior resolución se denegó por el mismo Ministerio de Marina en dieciséis de abril de mil novecientos sesenta y cuatro;

Resultando que «Agreda, Dutu y Cia.» solicitó del Ministerio de Comercio que le fuera concedida la reposición del algodón a precio bonificado que por los contratos le correspondían, o en su defecto, que se le indemnizara en la cantidad de dieciséis mil novecientas dieciocho pesetas con sesenta y cinco céntimos, resolviendo el Ministerio de Comercio en veintiocho de junio de mil novecientos sesenta y cuatro que, por tratarse del incumplimiento de una cláusula de contrato administrativo concertado con la Marina, carecía de competencia para entender del asunto, el cual estaba atribuido al Ministerio contratante, esto es, al de Marina;

Resultando que el cinco de junio de mil novecientos sesenta y cuatro «Agreda, Dutu y Cia.» reclamó del Ministerio de Marina bonificaciones en el precio del algodón como consecuencia de otros suministros, distintos del mencionado hasta aquí (uno de seis mil ochocientos treinta y ocho sacos de loneta por un

importe de pesetas doscientas noventa y cinco mil cuatrocientas una con setenta céntimos, cuya fecha de subasta fué la de diez de noviembre de mil novecientos cincuenta y nueve, y otro de cinco mil novecientos noventa y dos sacos de loneta por un importe de pesetas cincuenta y ocho mil ochocientos cincuenta y cuatro pesetas con cuarenta céntimos, subastado en diciembre de mil novecientos sesenta), efectuados a la Intendencia de Marina en cumplimiento de los contratos suscritos entre ambos, ya que, habiendo sido reclamadas tales bonificaciones o indemnizaciones del Ministerio de Comercio, éste resolvió declarar incompetente en veintiséis de mayo de mil novecientos sesenta y cuatro, por entender que los concursos en que se basa «Agreda, Dutu y Cia.» son «res inter alios facta», ignorándose los compromisos contractuales que hubiese entre el Ministerio de Marina y la Empresa recurrente, y, tras diversas incidencias de mención innecesaria, Marina desestimó la reclamación el diecisiete de septiembre de mil novecientos sesenta y cuatro,

Resultando que el siete de agosto de mil novecientos sesenta y cuatro «Agreda, Dutu y Cia.» solicitó de los Ministerios de Marina y de Comercio, por medio de los escritos correspondientes, que se tuviera por planteado conflicto negativo de atribuciones entre ambos Departamentos, éstos ratificaron su incompetencia en ocho de octubre y doce de septiembre, respectivamente, y dándose mutua comunicación del hecho, enviaron los antecedentes a la Presidencia del Gobierno.

Vistos:

El artículo cuarenta y siete de la Ley de Conflictos Jurisdiccionales: «En el caso de que las dos autoridades confirmen su declaración de incompetencia se entenderá planteada la cuestión de competencia negativa, y ambas remitirán directamente por el primer correo las respectivas actuaciones a la Presidencia del Gobierno, dándose mutuo aviso de la remesa, sin ulterior procedimiento...»; el artículo treinta y dos de la misma: «La Presidencia del Gobierno acusará a los contendientes recibo del expediente y de los autos que le hayan remitido; dentro de los ocho días siguientes al de la recepción de las actuaciones que últimamente lleguen a su poder las pasará al Consejo de Estado».

El artículo segundo de la Orden del Ministerio de Industria y Comercio de veinticuatro de junio de mil novecientos cuarenta y nueve: «De las disponibilidades de algodón en rama a que se refiere el punto anterior se deducirán... aquellas otras partidas que correspondan a la atención de las necesidades de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, Institutos Armados y Frente de Juventudes, cuyos suministros, así como los anteriormente citados de exportación, se considerarán como absolutamente preferentes».

El artículo tercero de la Orden conjunta de los Ministerios de Industria y Comercio: «El Centro Algodonero Nacional recibirá directamente de los Ministerios de Industria y Comercio las órdenes oportunas para la entrega de las partidas correspondientes a las necesidades de Intendencia Militar y otras preferentes... Igualmente recibirá las órdenes correspondientes para la entrega de los cupos normales, aprobados por la Secretaría General, Técnica de Industria, para los industriales y laboradores».

El artículo ciento veintinueve de la Ley de Expropiación Forzosa de dieciséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro: «Uno Dará también lugar a la indemnización con arreglo al mismo procedimiento toda lesión que los particulares sufran en los bienes y derechos a que esta Ley se refiere, siempre que aquella sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, o la adopción de medidas de carácter discrecional no fiscalizables en vía contenciosa, sin perjuicio de las responsabilidades que la Administración pueda exigir de sus funcionarios con tal motivo».

El artículo cuarenta, número uno, de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado: «Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por el Estado de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que aquella lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos o de la adopción de medidas no fiscalizables en vía contenciosa».

El artículo dieciséis de la Ley de Procedimiento Administrativo de diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta y ocho: «Los conflictos de atribuciones entre dos Ministerios o entre autoridades administrativas dependientes de distintos Departamentos ministeriales se tramitarán y resolverán conforme a lo dispuesto en la Ley de Conflictos Jurisdiccionales.» Y el artículo setenta y tres de la misma: «Uno El Jefe de la Sección o dependencia donde se inicie o en que se tramite cualquier expediente, bien por propia iniciativa o a instancia de los interesados, podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde íntima conexión.»

La condición quinta económico-facultativa del Pliego de condiciones para el concurso de vestuarios vigente para los contratos celebrados por el Ministerio de Marina el año mil novecientos cincuenta y nueve: «Todos los adjudicatarios deberán facilitar la totalidad de las primeras materias precisas para la fabricación y entrega de lo adjudicado dentro de los plazos citados anteriormente».

Los adjudicatarios de lotes de prendas, géneros y efectos en cuya confección o fabricación entren primeras materias intervenidas que deseen su reposición podrán solicitarlo de la Jefa-

tura de los Servicios de Intendencia de la Armada, una vez terminada de conformidad la totalidad de la adjudicación a que este concurso abarca.

Si interesara a algún proveedor la reposición de materias primas en forma parcial podrá solicitarlo, al final de cada anualidad, que se lo gestionen las anticipadas durante la misma o las que correspondan a cien mil metros o veinticinco mil unidades servidas—en los lotes cuya cuantía anual exceda de esta cantidad—, lo que no le excluirá de la obligación general de contar con materias primas suficientes para atender el total de su compromiso, tanto en cantidad como en calidad, y sin que pueda alegar demoras en el servicio por las que pudieran producirse en la entrega de las solicitudes.

La gestión de la Marina, a los anteriores efectos, se limitará a tramitar al Organismo oficial correspondiente las solicitudes de primeras materias intervenidas, entendiéndose que si quedasen en régimen de libertad antes de cumplirse las condiciones anteriormente señaladas, la Marina cursará los pedidos correspondientes a lo ya servido para su reposición en las condiciones existentes al formalizarse el contrato, quedando relevada, a partir de ese momento, tanto de sucesivas entregas como de aquélla, si fuere denegada.

En el caso de que continuase la intervención, pero fueren modificados los términos en que se ejerce, se seguirán las vicisitudes que las disposiciones consecuentes determinen.

En ambos casos no se modificarán las condiciones estipuladas, a menos que expresamente lo preceptúe una disposición legal.»

El artículo cuarenta y cinco de la Ley de Procedimiento Administrativo de diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta y ocho: «Uno. Los actos de la Administración serán válidos y producirán efecto desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

Dos. La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación posterior.

Tres. Excepcionalmente podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, y asimismo cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.»

Considerando que el presente conflicto negativo de atribuciones ha surgido entre el Ministerio de Marina y el de Comercio, basando el primero su incompetencia en las siguientes razones.

Uno. Que al no haberse consignado en ningún ejercicio económico del presupuesto de este Ministerio crédito legislativo alguno para el pago de bonificaciones o primas de algodón, es evidente que no puede acordarse ningún gasto para el pago de la cantidad reclamada por la Sociedad recurrente.

Dos. Que la Marina ha cumplido, a través de los cauces legales y reglamentarios y con la mayor diligencia e interés, todas las obligaciones que le correspondían en virtud del contrato relativo a los suministros de que se trata, y es ajena, por tanto, a que a la Entidad «Agreda, Dutu y Cia.» no le haya sido repuesto el algodón correspondiente, sin que tampoco pueda acceder a la indemnización.

Tres. Que corresponde a la Subsecretaría de Comercio dar la debida solución a la cuestión planteada, por tratarse de actos administrativos emanados de la misma, y apoyándose el de Comercio en las siguientes alegaciones:

Uno. Que el caso es evidentemente el de incumplimiento de una cláusula adicional de un contrato administrativo, concertado por «Agreda, Dutu y Cia.» con el Ministerio de Marina, y parece que es a tal Departamento a quien corresponde conocer de todas las cuestiones derivadas de dicho contrato, dado que el Organismo que contrató es el que conoce cuantos datos y antecedentes son precisos para examinar todo el proceso de formación y perfeccionamiento del contrato y, por tanto, para estimar si la pretensión de indemnización es procedente.

Dos. Que otra cosa sería si el alcance de la pretensión actuada ante el Ministerio de Comercio hubiera sido la de impugnación o recurso contra la resolución de la Subsecretaría de Comercio de doce de diciembre de mil novecientos sesenta que acordó la supresión de las bonificaciones o primas del algodón destinado a suministros para las distintas Intendencias Militares;

Considerando que dejando a salvo el principio de la unidad de la personalidad jurídica de la Administración, afirmada en el artículo primero de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, ésta actúa en la gestión de los cometidos que le son propios mediante unos órganos, también mencionados en dicho artículo, entre los que se distribuye la competencia, según varios criterios, uno de los cuales es el criterio material, y así los Jefes de cada Departamento ministerial entienden en aquella parte de la acción administrativa que a su Ministerio corresponde por razón de la materia que le está encomendada. Dentro de su esfera propia, cada Ministerio debe entender y resolver, como precisa el número siete del artículo seis de la misma Ley, en las reclamaciones contra la gestión de los organismos de su Departamento, los cuales, como uno de los medios de tal gestión, pueden, dentro de las prescripciones de la Ley de Administración y Contabilidad, concertar contratos para la realización de los servicios y las reclamaciones a que puede dar lugar el cumplimiento o incumplimiento de tales contratos por parte de la Administración, habrá de recibirlas y resolverlas

el Jefe de aquel Departamento por uno de cuyos organismos se concertó el contrato;

Considerando que corresponde al Ministerio de Marina, como órgano administrativo que contrató en diez de diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve con «Agreda, Dutu y Cia.» el suministro de vestuario, en el que intervenía como primera materia el algodón a precio bonificado, con arreglo a las disposiciones por las que se rigió el contrato objeto del presente conflicto, conocer en su totalidad de la reclamación presentada por «Agreda, Dutu y Cia.», como basada en el contrato existente entre ésta y aquél, ya que el Ministerio de Comercio, que ciertamente dictó la Resolución de doce de diciembre de mil novecientos sesenta, carece, sin embargo, de competencia para examinar y decidir las repercusiones del mismo en la esfera puramente contractual, única afectada, en principio, en el presente caso, sin que nada de ello prejuzgue si la reclamación promovida está o no justificada.

De conformidad con el dictamen emitido por el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión de diecinueve de febrero de mil novecientos sesenta y cinco,

Vengo en decidir el presente conflicto negativo de atribuciones a favor del Ministerio de Marina, a quien corresponde la competencia para resolver el asunto discutido.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a once de marzo de mil novecientos sesenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 559/1965, de 11 de marzo, por el que se resuelve el conflicto negativo de atribuciones suscitado entre los Ministerios del Ejército y de Comercio con motivo de reclamación presentada por «Maristany Fabril Textil, S. A.», por falta de entrega de algodón en reposición del empleado en determinados suministros contratados con la Intendencia Militar.

En los expedientes del conflicto negativo de atribuciones surgido entre los Ministerios del Ejército y de Comercio, con motivo de la reclamación presentada por «Maristany Fabril Textil, S. A.», por falta de entrega de algodón en reposición del empleado en determinados suministros a la Intendencia Militar, y

Resultando que, con fecha catorce de marzo de mil novecientos sesenta y cuatro, «Maristany Fabril Textil, S. A.», presentó dos escritos iguales, uno al Ministro del Ejército y otro al Ministro de Comercio, en los que solicitaba el planteamiento entre ambos de un conflicto negativo de atribuciones, sobre su reclamación de setecientos veintisiete mil cuatrocientas noventa y dos pesetas con cincuenta céntimos, por suministro de algodón al Ejército y falta de entrega al reclamante de la cantidad correspondiente de algodón al precio de Intendencia, reclamación sobre la cual la Junta Central de Adquisición y Enajenaciones de la Dirección General de los Servicios del Ejército del Ministerio del Ejército había resuelto en ocho de noviembre de mil novecientos sesenta y dos que corresponde al Ministerio de Comercio, mientras que el Ministerio de Comercio había declarado en Orden ministerial de veinticuatro de febrero de mil novecientos sesenta y cuatro, confirmatoria de otra de diez de julio de mil novecientos sesenta y tres, que el único competente es el Ministerio del Ejército;

Resultando que, al recibirse dicho escrito en el Ministerio de Comercio, se pasó a informe de su Asesoría Jurídica, la cual dictaminó, en veinticinco de marzo de mil novecientos sesenta y cuatro, que procedía sostener que la competencia corresponde al Ministerio del Ejército, y, de acuerdo con ese dictamen, el Ministerio de Comercio, en resolución fundada de ocho de abril de mil novecientos sesenta y cuatro, declaró su propia incompetencia en cuanto a la reclamación de «Maristany Fabril Textil, S. A.», fundándose en que lo que reclama «Maristany Fabril Textil, S. A.», es una indemnización por falta de cumplimiento de una contraprestación adicional en su contrato de compraventa concertado con la Junta de Adquisiciones y Enajenaciones del Ministerio del Ejército y por ello es a tal Departamento a quien corresponde el conocimiento de la reclamación, ya que obran en él todos los antecedentes que han de ser examinados, comunicando esta resolución con la misma fecha al otro Departamento;

Resultando que cuando se recibió el escrito de «Maristany Fabril Textil, S. A.», a que se hace referencia en el Resultando primero, en el Ministerio del Ejército, informó sobre el mismo su Asesoría Jurídica, con fecha diecisiete de abril de mil novecientos sesenta y cuatro, que consideraba ser de la competencia del Ministerio de Comercio la resolución del problema planteado, por entender que el Ministerio del Ejército venía solamente obligado a hacer lo necesario para que la reposición fuese concedida por el Ministerio de Comercio a unos precios determinados, y tal obligación se entiende cumplida por el hecho de haberse expedido la certificación acreditativa del derecho de reposición, siendo de la competencia del Ministerio de Comercio el que tal reposición se efectúe, y que por ello, manteniendo la declaración de incompetencia, era pertinente que las actuaciones se remitiesen a la Presidencia del Gobierno, por